



# ATÁTÔT

REVISTA INTERDISCIPLINAR  
DE DIREITOS HUMANOS

ISSN 2675-9292

**Con la guerrilla en el poder no debería haber disculpa para la paz**

**Com a guerrilha no poder não deveria haver desculpa para a paz**

**With the guerrilla in power there should be no excuse for peace**

**Robert Posada Rosero**

(Periodista Colombiano y Defensor de Derechos Humanos Desarrollo - NTPC/UFPA)

E-mail: [robpos1@hotmail.com](mailto:robpos1@hotmail.com)

**Recibido em: 27/06/2022**

**Aceito em: 30/09/2022**

El momento político que demanda el país requiere abrir un diálogo profundo, honesto y equilibrado sobre las causas del conflicto en Colombia y los obstáculos históricos que se planteaban como inamovibles en la búsqueda de la reconciliación nacional que conduzca a la tan anhelada paz total.

Con la idea de avanzar en ese ejercicio de análisis integral me aventuré a leer los libros ‘Crónica oculta del conflicto’ del escritor, actor y director de teatro Manuel Giraldo, una mirada a nuestra trágica realidad desde la óptica de un militante de izquierda, y ‘Detrás de la guerra en Colombia’, del subdirector académico de la Fundación Paz y Reconciliación y ahora senador por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila, aproximación necesaria para intentar hallar ese punto intermedio que trascienda los extremos.

Lo primero que llama poderosamente la atención es que Giraldo, interpretando el sentir de sus pares ideológicos alzados en armas, expresa que “una evaluación seria de los





procesos de paz requiere esclarecer el interrogante si está dispuesto el Estado a asumir los cambios que la sociedad necesita... para que existan otras formas de gobierno, donde la insurgencia o la izquierda puedan ser gobierno”.



Un anhelo que se hizo realidad en gran medida como resultado del acuerdo de paz adelantado en Cuba entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, proceso que condujo a la llegada al poder del exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, quien contó con el apoyo de todos los partidos de izquierda, partido Comunes (integrado por ex miembros de las Farc con representación en el congreso) y de las guerrillas del ELN y disidencias de las Farc, que también le expresaron su apoyo desde la clandestinidad.

Es decir, más de 60 años de confrontación bélica, que según la Comisión de la Verdad contó con la participación de “guerrillas y paramilitares como aparatos armados que responden a un entramado de intereses políticos y económicos”, incluyendo por supuesto el narcotráfico y otras economías ilegales, al final inclinó la balanza para que una de las partes en contienda se alzara con el poder gubernamental por la vía política.

Un triunfo indiscutible de las guerrillas sobre el establecimiento, pero sobre todo de nuestra frágil democracia, que por sí solo no resolverá todas las problemáticas del país, pues ahora más que nunca se necesita alcanzar un consenso que permita realizar “las reformas políticas, económicas y sociales, pero, ante todo, el desarrollo de una cultura de paz basada en el respeto a la diferencia”, proceso que será infructuoso si continuamos “polarizando y dividiendo al país entre bueno y malos”, como advirtió en 2008, el exdirigente sindical y ministro de Trabajo y Seguridad Social, Angelino Garzón.

En ese contexto es válido revisar una de las vicisitudes que se plantea Giraldo en el sentido de que auspiciadores y financiadores (voluntarios u obligados) de los grupos paramilitares son tan culpables como estos de sus crímenes, y cuestionó “si el fin justifica los medios”, premisa que para hacer justicia debería aplicarse a sus pares las guerrillas, que también en aras de unos fines loables cometieron todo tipo de excesos y crímenes de lesa humanidad e igualmente han contado con auspiciadores y financiadores (voluntarios u obligados), como confirman los datos recopilados por Ávila sobre el conflicto.



Giraldo también hace un fuerte cuestionamiento a “aquel sofisma que han argumentado algunos politólogos de que el país no resiste la verdad”, punto en el que coincidimos, el país no solo debe resistir la verdad, pero esta debe ser reconstruida con filigrana para que sea aceptada por todos los actores y el grueso de la sociedad, de lo contrario se corre el riesgo de una mayor polarización y el choque de posturas irreconciliables que podrían derivar en una nueva ola de violencia y la agudización de nuestro conflicto interno.

En su momento, los sectores que hoy están en el poder, rechazaron y cuestionaron la Ley de Justicia y Paz al considerar que lo único que procuraba era generar impunidad para los paramilitares, un reclamo válido que deberíamos aplicar con el mismo rasero al momento de evaluar la eficiencia, efectividad y eficacia de la Justicia Especial para la Paz, JEP, surgida de los acuerdos de La Habana para juzgar a la guerrilla.

Consultado al respecto sobre el escandaloso grado de impunidad en Colombia frente a crímenes violatorios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, DIH, afectando en un 90% a la población civil en más de seis décadas de conflicto interno, como concluyó el Informe Final de la Comisión de la Verdad, el escritor, sociólogo, periodista y Comisionado de la Verdad, Alfredo Molano, indicó, “lo que pasa es que exigirle a la Fiscalía que cumpla la ley, para la guerrilla también es grave; no se le puede exigir cumpla la ley de aquí para allá, pero no de allá para acá”.

Asimismo, el comandante de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, expresó que “no puede haber dos Estados: el paramilitarismo que masacra a nombre del Estado, y un Estado amparado en un ejército que, cuando no participa en los crímenes, los permite a nombre del Estado”, premisa que se debe aplicar a la actualidad del país, pues no se puede tener a la guerrilla actuando a nombre del Estado, y disidencias delinquiendo con la anuencia del Estado.

Aunque haya posiciones antagónicas, en este entramado de agresiones mutuas sin fin entre ciudadanos de una misma nación, un verdadero primer paso sería el desarme del lenguaje,



porque no se puede hablar de reconciliación mientras se descalifica y agrede a la contraparte manteniendo una narrativa violenta, como reflexionaba en su momento el mismo Manuel Marulanda, "si las Fuerzas Militares consideran a las guerrillas como bandidos o delincuentes la insurgencia tiene claro que las fuerzas regulares del Estado son criminales".

No menos importante en esta nueva coyuntura es definir el tratamiento que un gobierno autodenominado progresista debe dar a los medios de comunicación y periodistas, ya que sería un error persistir en el relato de deslegitimación y estigmatización acusándolos de cómplices del establecimiento al "ocultar la verdad", pues nadie puede discutir el rol que cumple una prensa libre y fuerte en defensa de los derechos ciudadanos y como garante de la democracia.

Son muchas y muy variadas las reflexiones que debemos emprender todos los colombianos en la construcción de la nueva Colombia, un camino que no estará exento de obstáculos y riesgos, pero que debería tener como punto de partida aceptado por los actores y ciudadanos que los Derechos Humanos son universales, y deben aplicar para todos sin distingo de clase social, posición ideológica o color político.